



UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de septiembre de 2024

Control Interno: 251/2024

Folio: 251264400025124

Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Apreciable solicitante:

En atención a su solicitud de información, registrada con número de folio 251264400025124 correspondiente al control interno 251/2024, efectuada de manera electrónica a través del sistema Plataforma Nacional de Transparencia, presentada el día 24 de septiembre del año 2024, se le comunica que:

I. De los plazos de respuesta y forma de entrega:

El plazo para ser atendida es de 03 días hábiles, conforme lo previsto en el artículo 140 primer párrafo en relación con el 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el periodo para su computo es a partir del día hábil siguiente a su presentación, con fecha de inicio 25 de septiembre de 2024 y fecha de expiración del 27 de septiembre de 2024.

Según obra en registros, su petición para la entrega de la información es por medio de Plataforma Nacional de Transparencia.

II. De la respuesta que se otorga:

En la solicitud de información recibida textualmente se pide:

“Solicito el número de carpetas de investigación existentes por el delito de feminicidio en grado de tentativa (o tentativa de feminicidio) en 2022 y 2023 en el estado de Sonora y Sinaloa con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 4º y 22º que establecen este órgano como sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder.

Artículo 4: El acceso a la información pública es un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, recopilada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.

Art. 21

Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ayuntamientos, organismos descentralizados y desconcentrados estatales y municipales, órganos y organismos autónomos, universidades públicas e instituciones de educación superior, partidos políticos y agrupaciones políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 6 fracción II y V, 7 fracción II, 8 fracción III, 32 y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 1, 11 inciso A) fracción I, 12 fracciones III inciso a) y VIII, 13 fracción I, 21 fracción II, 25 inciso B) fracción I, 40 inciso a), 42 fracción VIII y 43 inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; la integración de las carpetas de investigación, entre otras, son facultad correspondiente al Ministerio Público del Estado de Sinaloa, Dependencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; por lo que al ser una institución diferente a la que usted se dirigió, se le orienta a presentar su solicitud ante la autoridad señalada.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el siguiente Criterio 16/09 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que textualmente a la letra dispone lo siguiente:

La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada –es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara.

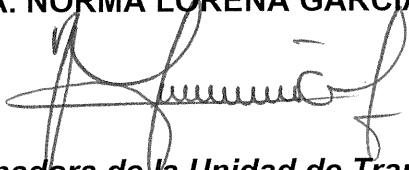
III. Del fundamento al procedimiento de atención de su solicitud:

Conforme lo dispuesto por los artículos 136 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XXV, 19, 68 fracciones II y III; 130 y 140 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 87 y 89, fracciones II y III del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

IV. De la aclaración a la respuesta proporcionada:

En caso de cualquier duda, o problemas al visualizar su contenido, estamos a sus órdenes en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa ubicadas en el Palacio de Justicia, con domicilio en Segundo Nivel, Lázaro Cárdenas 891, Colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80000; número telefónico 6677611723, así como en la cuenta de correo electrónico utstj@stj-sin.gob.mx

ATENTAMENTE
MTRA. NORMA LORENA GARCÍA LÓPEZ



***Coordinadora de la Unidad de Transparencia
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.***

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SINALOA



PODER JUDICIAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de septiembre de 2024

RESOLUCIÓN: EX22-001/2024

Declaración de Incompetencia CT251/2024

Solicitud de información: 251264400025124

Analizado el expediente citado en el rubro, formado con motivo de la declaración de incompetencia para tramitar y dar respuesta a los elementos informativos contenidos en la solicitud con número de folio 251264400025124 afecta al control interno 251/2024, propuesta por la Mtra. Norma Lorena García López, Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, mediante oficio **UT251-001/2024**, este Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, integrado de acuerdo a lo previsto por el artículo Primero del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, por los CC. Dr. José Ramón Bohon Sosa, en su carácter de Presidente, Mtra. Norma Lorena García López, Secretaria Ejecutiva, y Lic. Felipe Alberto Valle Nieblas, Vocal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emite la presente resolución:

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. La solicitud de referencia fue presentada el día 24 de septiembre de 2024 a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, bajo el folio 251264400025124, texto íntegro que se presentó a los miembros del Comité.
2. Atendiendo a la petición contenida en el oficio **UT251-001/2024**, se advierte que se somete a consideración de este órgano colegiado, la incompetencia objeto de la solicitud de información con número de folio 251264400025124, afecta al control interno 251/2024, en apego a lo dispuesto por el artículo 66 fracción II, en relación con el 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer de la mencionada solicitud.
3. Recibido el oficio antes citado, este Comité de Transparencia lo integró al expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

II. COMPETENCIA

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66, fracción II, y 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sinaloa; Primero y Segundo fracción II del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Analizados los argumentos efectuados por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa mediante oficio **UT251-001/2024**, este Comité considera acertada la incompetencia de este organismo colegiado para tramitar y dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 251264400025124 afecta al control interno 251/2024, orientando para que dicha solicitud se dirija al sujeto obligado que se menciona en el propio escrito de petición, que lo es el Ministerio Público del Estado de Sinaloa, dependencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, al sustentar su determinación en las consideraciones siguientes:

“...Analizando el objeto de la solicitud, es consideración de esta Unidad de Transparencia comunicar que la información solicitada no corresponde al ámbito de competencia de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, ya que dada su naturaleza, lo petitionado no concierne a las funciones, atribuciones y facultades de este Sujeto Obligado que en esencia, es garantizar a toda persona el efectivo derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en términos de su artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que lo requerido es facultad correspondiente del Ministerio Público, dependencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Lo anterior con fundamento en los artículos 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 6 fracción II y V, 7 fracción II, 8 fracción III, 32 y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; 1, 11 inciso A) fracción I, 12 fracciones III inciso a) y VIII, 13 fracción I, 21 fracción II, 25 inciso B) fracción I, 40 inciso a), 42 fracción VIII y 43 inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 fracción II, y 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a su consideración la declaración de incompetencia y en su momento se me comuniqué el resultado de ello.

En las relatadas consideraciones, solicito del Comité de Transparencia, analice, y en su caso, confirme la declaratoria de incompetencia que se le propone, de acuerdo a lo previsto por la fracción II del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.”

SEGUNDO. En ese orden de ideas la declaración de incompetencia, se considera acertada en razón de que, como lo señala la Coordinadora de la Unidad de Transparencia, es facultad correspondiente del Ministerio Público, dependencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por lo que no corresponde al ámbito de

competencia de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en virtud de que dada la naturaleza, de lo peticionado no concierne a las funciones, atribuciones y facultades de este Sujeto Obligado, orientando para que la pretensión informativa que antecede la dirija y formule ante la autoridad señalada, sustentando dicha determinación con fundamento en los siguientes artículos:

El artículo 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 21. *La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

Por su parte la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 76 señala que:

Art. 76. *El Ministerio Público, como representante de la sociedad en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado.*

Como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, de patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad humana.

Las bases de la Fiscalía General del Estado, son:

a) Cumplir en el ámbito de su competencia, con las disposiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fundamenta en la actuación del Ministerio Público.

b) La investigación como la persecución ante los tribunales locales de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, corresponden al Ministerio Público y a los elementos policiacos del sistema de seguridad pública, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

c) La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con los vicefiscales general, especializados y regionales, policías de investigación y demás personal que estará bajo su autoridad en los términos que establezca la ley. En la designación del titular del órgano, así como de los demás titulares dentro de su estructura se observará el principio de la paridad de género. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).

d) El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

e) El Ministerio Público procurará que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas y la reparación del daño e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

f) La ley establecerá los medios de impugnación a través de los cuales las víctimas u ofendidos del delito podrán recurrir, por la vía jurisdiccional, las omisiones de la Fiscalía General en la investigación de los delitos, así como las resoluciones sobre la reserva de las investigaciones preliminares, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

g) Contará con un Consejo Consultivo integrado bajo el principio de paridad de género. (Ref. Según Decreto No. 452, de fecha 02 de junio de 2020 y publicado en el P.O. No. 079, primera sección, de fecha 01 de julio de 2020).

El Consejo Consultivo estará integrado además por personas ciudadanas de la sociedad sinaloense de reconocido prestigio y cuya función la desempeñarán de forma honorífica.

La Ley fijará las características y funciones del Consejo Consultivo, así como la elección de sus miembros honoríficos.

(Ref. Según Decreto No. 66, de fecha 31 de enero del 2017, publicado en el P.O. No. 018 Edición Vespertina de fecha 06 de febrero de 2017).

Mientras que, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en sus artículos 1, 2, 3, 6 fracción II y V, 7 fracción II, 8 fracción III, 32 y 46, establecen lo siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le confieren a la Institución del Ministerio Público, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 2. El Ministerio Público del Estado tiene como función representar a la sociedad. A éste le compete la investigación de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado y de manera exclusiva, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, salvo los casos previstos en la Ley; asimismo, intervendrá en todos los asuntos que esta Ley u otras leyes al respecto establezcan.

Artículo 3. Para la investigación de los delitos del orden común, competencia del Ministerio Público del Estado, las policías actuarán en los términos señalados en los artículos 21 de la Constitución Federal y 76 de la Constitución del Estado, bajo su conducción y mando.

Por conducción se entiende que es la dirección jurídica que ejerce el Ministerio Público sobre las instituciones policiales en la investigación de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Por mando se entiende que es la facultad del Ministerio Público de ordenar a las instituciones policiales actos de investigación y de operación.

Artículo 6. Son facultades del Ministerio Público, las siguientes:

II. Iniciar la investigación que corresponda de oficio o a petición de parte, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la Ley correspondiente señale como delito, para lo cual deberá recabar la denuncia, querrela o requisito equivalente que establezca la Ley;

V. Ejercer la conducción y mando, en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal, de las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios;

Artículo 7. *Las bases constitucionales de la Fiscalía General de conformidad con el artículo 76, párrafo tercero de la Constitución del Estado, son:*

II. La investigación como la persecución ante los tribunales locales de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado, corresponden al Ministerio Público y a los elementos policiacos del sistema de seguridad pública, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función;

Artículo 8. *Corresponde a la Fiscalía General:*

III. Fomentar las políticas para la investigación y persecución penal de los delitos en el ámbito local;

Artículo 32. *Para la investigación de los delitos las policías actuarán en los términos señalados en el artículo 21 de la Constitución Federal y 76 de la Constitución del Estado, bajo la conducción y mando del Ministerio Público.*

En ejercicio de la conducción y mando del Ministerio Público, la Fiscalía General deberá emitir los instrumentos jurídicos que sean necesarios de cumplimiento obligatorio para regular la actuación de las instituciones policiales en el ejercicio de la función investigadora.

Los peritos que formen parte de la Fiscalía General, actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen.

Artículo 46. *La Policía de Investigación actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, con estricto apego a los principios reconocidos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, las leyes aplicables y además tendrá las obligaciones siguientes:*

I. Realizar la investigación de los hechos con metodología basada en conocimientos jurídicos, científicos y técnicos;

II. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de éstas y de las diligencias urgentes;

III. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlas del conocimiento del Ministerio Público, a efecto de que éste autorice cerciorarse, conforme a derecho, de la veracidad de los datos aportados;

IV. Registrar sus actuaciones en el sistema informático de la Fiscalía General, bajo el número interno de control o el número único de causa que genere el Ministerio Público y alimentarlo con la información requerida, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y la normatividad que emita el Fiscal General;

V. Realizar, con apego a estándares nacionales e internacionales del uso de la fuerza legal, detenciones en flagrancia y cuasi flagrancia acorde con la Constitución Federal, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le reconoce;

VI. Impedir que se consuman o continúen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores.

Especialmente realizará todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente, en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger;

VII. Actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el aseguramiento y resguardo de bienes relacionados con la investigación de los delitos;

VIII. Informar sin dilación y por cualquier medio, al Ministerio Público, sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezca la Fiscalía General. En caso que el detenido sea extranjero, notificará esta situación al Ministerio Público y éste a la embajada o consulado que corresponda, a fin de que se le proporcione la asistencia respectiva;

IX. Practicar las inspecciones, revisiones y otros actos de investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público. En los casos que se requiera autorización judicial, la solicitará a través del Ministerio Público;

X. Preservar y procesar, en coordinación con los Servicios Periciales, cuando resulte procedente, el lugar de los hechos o del hallazgo, resguardar la integridad de los indicios y dar aviso al Ministerio Público conforme a las disposiciones aplicables para su conducción jurídica e iniciar y continuar la cadena de custodia de los indicios recabados hasta que otra autoridad asuma competencia sobre estos;

XI. Recolectar, trasladar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior;

XII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación, realizando el registro correspondiente;

XIII. Requerir a través de registro fehaciente a las autoridades competentes y solicitar por escrito a las personas físicas o jurídicas colectivas, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente;

XIV. Proporcionar atención a las personas víctimas u ofendidos o testigos del delito, con el registro respectivo. Para tal efecto, deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, conforme a las circunstancias del caso y en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen y canalizarla a la autoridad competente para el ejercicio de sus derechos;

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica de urgencia, cuando sea necesaria; y

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica.

XV. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos y rendir inmediatamente el informe respectivo al Ministerio Público;

XVI. Poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público, a las personas detenidas con los informes y formatos respectivos debidamente llenados;

XVII. Emitir los informes, informes policiales homologados y demás documentos que se requieran en la normatividad, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Para tal efecto se podrán apoyar en las y los servidores públicos con los conocimientos que resulten necesarios sin que ellos constituyan dictámenes periciales;

XVIII. Registrar cada una de sus actuaciones, así como llevar el control y seguimiento de éstas, y poner los registros junto con sus informes a disposición del Ministerio Público;

XIX. Compartir la información con unidades específicas del Ministerio Público y de información o análisis, así como enviar la información que corresponda a las bases de datos de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, conforme a las normas aplicables;

XX. Rendir los informes que de manera fundada y motivada le sean requeridos para atender las solicitudes de organismos internacionales, nacionales y estatales protectores de los derechos humanos, dentro del plazo que les sea señalado;

XXI. Realizar las funciones que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás normatividad aplicable le atribuya;

XXII. Brindar la custodia y protección a las personas y bienes que indique el Fiscal General y el Ministerio Público, en términos de la normatividad aplicable; y

XXIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

Por último, los artículos 1, 11 inciso A) fracción I, 12 fracciones III inciso a) y VIII, 13 fracción I, 21 fracción II, 25 inciso B) fracción I, 40 inciso a), 42 fracción VIII y 43 inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, establecen que:

Artículo 1. *El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, precisar su estructura orgánica y establecer las atribuciones que le corresponden a sus unidades administrativas.*

Corresponde a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la aplicación de las disposiciones de este Reglamento.

El Fiscal General es el titular de la Fiscalía General, y está a cargo de la Institución del Ministerio Público, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Artículo 11. *Al Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones le corresponde:*

A. *En materia de persecución del delito:*

I. *Conducir la investigación de los delitos, en coordinación con la Policía de Investigación y los Servicios Periciales;*

Artículo 12. *La Fiscalía General para el despacho de los asuntos que le competen, estará integrada de las siguientes unidades administrativas:*

III. *Vicefiscalías Regionales.*

a) *Dirección de Unidad Regional de Integración de Carpetas de Investigación;*

VIII. *Policía de Investigación.*

Artículo 13. *Al Fiscal General, corresponde, sin perjuicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes atribuciones:*

I. *Dirigir y coordinar las actividades de la Fiscalía General, en la investigación y persecución de los delitos;*

Artículo 21. *La Unidad Especializada de Integración y Asuntos Especiales, estará a cargo de un Director de General, con carácter de Agente del Ministerio Público y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:*

II. *Iniciar, recibir, integrar y determinar las investigaciones respecto a los asuntos que expresamente le encomiende el Fiscal General;*

Artículo 25. *Al frente de la Vicefiscalía General del Estado habrá un Vicefiscal General, con carácter de Agente del Ministerio Público.*

Corresponde ejercer por sí o a través, de los servidores públicos titulares de las unidades administrativas que le estén adscritas, el ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones:

B. *En su calidad de Ministerio Público.*

I. *Ejercer las atribuciones que la Ley Orgánica y demás ordenamientos legales otorgan al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos;*

Artículo 40. *Las Vicefiscalías Regionales, para el desempeño de sus funciones se auxiliarán de las siguientes unidades administrativas:*

a) *Dirección de Unidad Regional de Integración de Carpetas de Investigación;*

Artículo 42. *Cada Vicefiscalía Regional tendrá una Dirección de Unidad Regional de Integración de Carpetas de Investigación, la cual estará a cargo de un Director de Unidad, con carácter de Agente del Ministerio Público y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:*

VIII. *Supervisar y coadyuvar en la adecuada integración de las carpetas de investigación de su respectiva competencia;*

Artículo 43. *Las Direcciones de Unidad Regional de Integración de Carpetas de Investigación, para el desempeño de sus funciones se auxiliarán de las siguientes unidades administrativas:*

a) *Subdirección de Integración de Carpetas de Investigación; y*

TERCERO. Que, si bien es cierto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, conoce de los casos penales una vez elevados los conflictos a los juzgados de primera instancia, es decir, cuando son judicializados, también lo es que no corresponde a este Sujeto Obligado conocer de las carpetas de investigación, que es la materia de la solicitud, lo cual es obligación del Ministerio Público Supervisar y coadyuvar en la adecuada integración de las carpetas de investigación.

CUARTO. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 66 fracción II, y 140 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral Segundo fracción II del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y tomando en consideración los fundamentos y motivos propuestos por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia de este Supremo Tribunal de Justicia, se procede a **confirmar por unanimidad** la declaración de incompetencia para tramitar y dar respuesta a la solicitud con número de folio 251264400025124 afecta al control interno 251/2024, señalándose como competente al Ministerio Público, dependencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

IV. RESOLUCIÓN

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la declaración de incompetencia para tramitar y dar respuesta a la solicitud con número de folio 251264400025124 afecta al control interno 251/2024, según lo precisado en los puntos SEGUNDO y TERCERO de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución.

SEGUNDO. Se determina reconducir la solicitud con número de folio 251264400025124 dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme lo dispuesto en el punto CUARTO de las Consideraciones y Fundamentos de esta resolución.

TERCERO. Se instruye a la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, notificar al solicitante, para los efectos conducentes.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria número **EX22/2024 de fecha 26 de septiembre de 2024**, por unanimidad de votos de sus integrantes, CC. Dr. José Ramón Bohon Sosa, Presidente, Mtra. Norma Lorena García López, Secretaria Ejecutiva y Lic. Felipe Alberto Valle Nieblas, Vocal, de conformidad con los artículos 65, 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Segundo fracción II y Tercero fracción III del Acuerdo de Creación del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.



Dr. José Ramón Bohon Sosa
Presidente



Mtra. Norma Lorena García López
Secretaria Ejecutiva



Lic. Felipe Alberto Valle Nieblas
Vocal